



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN

SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-014-2017-00942-01
Demandante:	Luzmila Bedoya Jaramillo
Demandado:	Colpensiones
Asunto:	Apelación, Consulta Sentencia
Procedencia:	Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada Ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Reajuste pensión sobrevivencia, Intereses moratorios

Medellín, abril veinte (20) de dos mil veintiuno (2021)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, CARLOS JORGE RUIZ BOTERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del decreto legislativo 806 del 2020, a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandante, así como el grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, respecto a la sentencia proferida el 28 de enero de 2021, por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora LUZMILA BEDOYA JARAMILLO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. Radicado 05001-31-05-014-2017-00942-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora LUZMILA BEDOYA JARAMILLO, llamó a juicio a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, a fin de que se declare que le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su esposo, Luis Carlos Barrera Estrada, desde el 28 de diciembre de 2015, en consecuencia se condene a Colpensiones a reconocer y pagar la prestación, con las mesadas adicionales de junio y diciembre, así mismo se condene al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y a la indexación de las condenas.

Como sustento de tales súplicas, se indicó que la señora Luzmila Bedoya Jaramillo contrajo matrimonio con el señor Luis Carlos Barrera Estrada el 1 de abril de 1978, fecha desde la cual convivieron de manera continua e ininterrumpida, compartiendo lecho, techo y mesa hasta el 28 de diciembre de 2015, fecha de fallecimiento del señor Luis Carlos Barrera Estrada, unión de la cual se procrearon dos hijos, mayores de edad y sin discapacidad alguna.

Se expuso que la demandante solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes el 26 de enero de 2016, prestación que le fue negada mediante resolución SUB 188928 del 6 de septiembre de 2017.

1.2.- CONTESTACIÓN

La entidad convocada al proceso se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, y en cuanto a los hechos, señaló no constarle ninguno y que se somete a lo que se demuestre en el plenario. En su defensa formuló las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar a la

demandante la pensión de sobrevivientes; falta de legitimación en la causa; falta de causa para pedir, que es cuando se pretende la aplicación de una Ley que no es la anterior sino una más antigua; inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios; improcedencia de la indexación de las condenas; prescripción; compensación; buena fe e imposibilidad de condena en costas.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, puso fin a la primera instancia mediante fallo proferido el 28 de enero del 2021, por medio de la cual dispuso estarse a lo dispuesto en la Resolución SUB 62063 del 03 de marzo de 2020, por medio de la cual COLPENSIONES reconoció y ordenó el pago, a prorrata, de una pensión de sobrevivientes, convenio Colombia – España, con ocasión del fallecimiento del señor Luis Carlos Barrera Estrada a partir del 28 de diciembre de 2015, en las cuantías indicadas y conforme al retroactivo pensional allí reconocido, con una mesada inicial de \$598.499, y para el año 2020 de \$753.346, teniendo en cuenta además la parte que le corresponde asumir al país de España; condenó a COLPENSIONES, a reconocer y pagar a la demandante la suma de tres millones treinta mil cuatrocientos pesos (\$3.030.400), por concepto de la indexación de las mesadas pensionales causadas entre el 28 de diciembre de 2015 y el 01 de abril de 2020, absolvió a COLPENSIONES de las demás pretensiones, declarando probada la excepción denominada inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios y condenó en costas Colpensiones.

1.4. RECURSO

El apoderado de la parte actora interpone recurso de apelación, señalando que la normativa internacional y los principios generales del derecho y la seguridad social indican que ninguna ley, convenio o acuerdo puede vulnerar los

derechos de los trabajadores o en este caso los derechos de los usuarios de la seguridad social, en este orden la Ley 1112 de 2006 convenio de la seguridad social entre el Reino de España y Colombia, no puede vulnerar los derechos al mínimo vital y los derechos mínimos de la seguridad social.

Afirma que no es coherente con los principios de economía, eficiencia, celeridad, no impartir condena por los intereses moratorios deprecados, pues la Ley 1112 de 2016, no derogó, ni el Código de Procedimiento Administrativo, la Ley 717 de 2001, ni la Constitución Política, debiéndose tener presente que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, da unos términos perentorios a las entidades de derecho público para resolver de fondo las peticiones que le son sometidas y en caso de no resolverlas dentro del término, indicar al administrado por qué se tardará más del término previsto para responder de fondo, sin que obre manifestación al respecto de Colpensiones de manifestar el término prudencial en el cual estaría resolviendo de fondo la petición de la demandante en vista del trámite interadministrativo que debía surtirse entre el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de la Seguridad Social en España.

Sostuvo que la relación interadministrativa entre Colpensiones, el Ministerio de Trabajo Colombiano y el Instituto Nacional de la Seguridad Social escapa al control de la demandante, las autoridades españolas tiene un término para responder de 15 días un trámite pensional, no es tema de debate pero es un tema conexo y este trámite tomó más de 4 años, pues la demandante presentó su solicitud el 15 de enero de 2016, y se le reconoció el derecho en marzo de 2020, sin que pueda decirse que es normal que un trámite administrativo tarde 4 años y medio, con el Reino de España, donde las autoridades administrativas son mucho más eficientes que las autoridades Colombianas.

Considera que la judicatura le traslada la carga, el tiempo de espera a la demandante, cuando incluso ella podría demostrar que hubo omisión en las autoridades del Reino Español y demandar al Estado Español por la omisión o la mora en estos tiempos, considerando que si bien no hubo mala fe, en principio, de Colpensiones en los términos para resolver, no se puede cargar a la demandante los 4 años de espera y la indexación reconocida no es la indemnización adecuada para la pérdida del poder adquisitivo del dinero por el paso del tiempo, por lo que solicita se revoque la sentencia en este sentido y se reconozcan los intereses moratorios a partir del vencimiento del término legal de 2 meses para el reconocimiento y hasta el 1 de abril de 2020, fecha de inclusión en nómina de pensionados o a partir del pago efectivo.

En cuanto al valor de la mesada pensional, sostuvo que el convenio lo que establece no es que sea una pensión compartida, Colpensiones o el Instituto Nacional de la Seguridad Social en España, pagan la pensión completa, correspondiendo cobrar la cuota parte a la entidad que pensiona y en este caso lo que se ve es que Colpensiones no ha efectuado el trámite para que el Reino de España a través del INS, le pague la parte que le corresponde, no es que el INS pague a la actora una parte y Colpensiones otra, Colpensiones paga la totalidad de la pensión, entonces se ve que Colpensiones está reconociendo un valor inferior al que corresponde a esta pensión, incluso daría para que le reconociera el monto superior al mínimo a la actora, lo que sería motivo para una reliquidación de pensión, siendo el debate que hay una pensión reconocida inferior al salario mínimo, y de acuerdo a los mismos convenios y principios constitucionales en Colombia, artículo 53 y 93 de la Carta Política, una pensión por debajo del mínimo afecta los derechos de la seguridad social de la demandante, por lo que es menester que se reajuste la mesada pensional en el salario mínimo.

1.5. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión se pronunció el apoderado de Colpensiones, solicitando se confirme la sentencia de primera instancia, en tanto que, a la demandante se le reconoce el derecho a la prestación por parte de Colpensiones, teniendo en cuenta los tiempos cotizados en Colombia y los tiempos cotizados en el reino de España, sin embargo, no procede la reliquidación. En lo relacionado con los intereses de mora, resaltó que la decisión de primer grado se encuentra ajustada, dado que la entidad se demoró en reconocer la prestación no porque guardara silencio o fuera negligente, sino que se requirió al reino de España para que allegara los documentos necesarios para reconocer tal prestación con el beneficio del convenio España, dado que había un trámite administrativo y éste no se había realizado, por lo tanto, no procede condena alguna por concepto de intereses de mora.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

De igual forma procede la consulta, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante*”.

2.1.- HECHOS NO DISCUTIDOS EN LA INSTANCIA

Encuentra la Sala que no son objeto de controversia los siguientes supuestos fácticos, los cuales se hallan acreditados:

- Que la señora Luzmila Bedoya Jaramillo y el señor Luis Carlos Barrera Estrada, contrajeron matrimonio el 1° de abril de 1978, (fl. 51 expediente digital).
- Que el señor Luis Carlos Barrera Estrada, falleció el 28 de diciembre de 2015, conforme al registro civil de defunción obrante a folio 42 del expediente digital.
- Que la señora Luzmila Bedoya Jaramillo, solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivencia el 26 de enero de 2016, prestación que le fue negada mediante resolución SUB 188928 del 6 de septiembre de 2017. (folios 33-41 expediente digital)
- Que Colpensiones a través de la Resolución SUB 62063 del 3 de marzo de 2020, reconoció y ordenó el pago a prorrata de la pensión de sobrevivientes a la demandante, atendiendo al Convenio Colombia – España, a partir del 28 de diciembre de 2015, en cuantía para dicha anualidad de \$598.499 y \$753.346 para el año 2020, con ingreso en nómina de marzo de 2020, (folios 191-203)

2.2.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe esta Sala de Decisión determinar:

¿Si es procedente revocar la sentencia proferida por el Juez Catorce Laboral del Circuito de Medellín, verificando para tal fin, y si hay lugar al reajuste de la mesada pensional reconocida en sede administrativa a la demandante y así

mismo, si procede el reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993?

2.3.- TESIS

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual, le asiste derecho a la demandante al reconocimiento y pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 03 de noviembre de 2019, no así al reajuste de la mesada pensional, en consecuencia, la sentencia debe ser MODIFICADA en el numeral segundo, REVOCADA en los numerales tercero y cuarto y CONFIRMADA en lo demás, como se explica:

2.4.- PREMISAS NORMATIVAS

Se encuentra acreditado y no es objeto de discusión en el presente litigio, que a la demandante le fue reconocida la pensión de sobrevivencia con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, señor Luis Carlos Barrera Estrada, por medio de la Resolución SUB 62063 del 3 de marzo de 2020, proferida en el trámite del proceso judicial, prestación reconocida con fundamento en el Convenio de Seguridad Colombia - España.

Conforme a lo anterior, debe acudir la Sala a las disposiciones de la Ley 1112 de 2006, por medio de la cual se aprueba el Convenio de seguridad Social entre la República de Colombia y el Reino de España, en este orden de ideas, el artículo 9º de la citada Ley, regula la liquidación de las prestaciones, así:

“ARTÍCULO 9. DETERMINACIÓN DEL DERECHO Y LIQUIDACIÓN DE LAS PRESTACIONES.

Con excepción de lo dispuesto en el artículo 18, el trabajador que haya estado sucesiva o alternativamente sometido a la legislación de una y otra Parte

Contratante tendrá derecho a las prestaciones reguladas en este Capítulo en las condiciones siguientes:

1. La Institución Competente de cada Parte determinará el derecho y calculará la prestación, teniendo en cuenta únicamente los períodos de seguro o cotización acreditados en esa Parte.

2. Asimismo la Institución Competente de cada Parte determinará el derecho a prestaciones totalizando con los propios los períodos de seguro o cotización cumplidos bajo la legislación de la otra Parte. Cuando efectuada la totalización se alcance el derecho a la prestación, para el cálculo de la cuantía a pagar, se aplicarán las reglas siguientes:

a) Se determinará la cuantía de la prestación a la cual el interesado hubiera tenido derecho como si todos los períodos de seguro o cotización totalizados hubieran sido cumplidos bajo su propia legislación (pensión teórica);

b) El importe de la prestación se establecerá aplicando a la pensión teórica, calculada según su legislación, la misma proporción existente entre el período de seguro o cotización cumplido en la Parte a que pertenece la Institución que calcula la prestación y la totalidad de los períodos de seguro o cotización cumplidos en ambas Partes (pensión prorrateada).

3. Determinados los derechos conforme se establece en los párrafos precedentes, la Institución Competente de cada Parte reconocerá y abonará la prestación que sea más favorable al interesado, independientemente de la resolución adoptada por la Institución Competente de la otra Parte”.

Resulta igualmente relevante, lo consagrado en el artículo 17 ibídem, el cual reza:

“ARTÍCULO 17. UNIDAD DE LA PRESTACIÓN.

1. En Colombia, se considera que la prestación que se otorgue en desarrollo del presente Convenio corresponde a la suma de las prestaciones que, por aplicación del artículo 9, reciba de cada una de las Partes Contratantes el trabajador. Cada prorratea considerada individualmente en sí misma, no es una pensión.

2. La Garantía de Pensión Mínima operará cuando la sumatoria de las mencionadas prestaciones sea inferior a un salario mínimo legal colombiano y el trabajador haya cumplido los períodos cotizados exigidos, una vez sean reconocidos los tiempos en ambas Partes.

3. En el evento en que la Parte colombiana deba comenzar a pagar antes que la Parte española la prorrata que le corresponde según el apartado 2 del artículo 9o del presente Convenio, la Institución Competente española certificará si el interesado ha cotizado en España y el período cotizado al Sistema Español de Seguridad Social. Con esta certificación se presumirá que el interesado está incluido, para la Parte española, en el ámbito de aplicación personal del Convenio. Para determinar, en este supuesto, el derecho de pensión prorrata y la garantía de pensión mínima, la Institución colombiana deberá aplicar la proporción existente entre el período de seguro cumplido en Colombia y la totalidad de los períodos cumplidos en ambas Partes. En ningún caso, la concesión de una pensión prorrata colombiana, por aplicación del presente Convenio, podrá obligar a las Instituciones colombianas a reconocer una cuantía de pensión superior a la prorrata que resulte del cálculo anterior. La garantía de pensión mínima podrá ser recalculada cuando la Institución española reconozca una pensión, aplicándose consecuentemente, el apartado 2 del presente artículo.”

2.5. CASO CONCRETO

El apoderado de la demandante señala como uno de los puntos de inconformidad, el hecho de que el fallador de primera instancia, no ordenara a Colpensiones reajustar la mesada pensional que viene reconociendo a la señora Luzmila Bedoya Jaramillo, no obstante que la misma es inferior al salario mínimo legal mensual vigente, razón por la cual solicita a esta Corporación, se disponga el reajuste de la misma; advirtiéndole la Sala que no es posible acceder a la pretendido por el recurrente, ello atendiendo a lo dispuesto en los artículos 9 y 17 de la Ley 1112 de 2006, pues es claro que en la prestación reconocida a la accionante (pensión teórica), confluyen tanto Colpensiones como el Reino Español, a través de la entidad de seguridad social competente, y si bien es Colpensiones, en este caso, quien liquida y reconoce la prestación, el pago se realiza a prorrata.

Tal hermenéutica fue acogida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL202 del 27 de junio de 2020

“Acorde con esta disposición, la «pensión teórica», a la que se hace referencia, es aquella que surge de la sumatoria de tiempos cotizados en España y Colombia, a la cual tendría derecho un afiliado en virtud de este Convenio; para establecer la existencia de esa acreencia, debe la entidad competente de cada parte, totalizar los periodos cotizados en ese país con los del otro.

Para efectos de entrar a determinar la cuantía de la pensión, deben suponerse que todos los periodos fueron cotizados bajo la legislación propia, y con base en ese cálculo se entra a establecer el valor de la cuota parte o «pensión prorratea» como allí se denomina, que a cada Estado le correspondería cancelar de acuerdo a la proporción de periodos cotizados que en ellos se haya aportado, sin que en ningún momento se puedan superponer o contabilizar tiempos dobles.”

En este contexto, se observa que la prestación reconocida y liquidada por Colpensiones en la Resolución SUB 62063 de 2020, para el año 2015, arrojó una mesada pensional de \$751.699, anualidad para la cual el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia, corresponde a \$644.350, es decir, que la mesada pensional a la señora Bedoya Jaramillo, le fue reconocida en una cuantía superior al mínimo legal, situación diferente es que Colpensiones para la mesada del año 2015, reconozca la suma de \$598.499, en razón al pago a prorratea que realiza.

Aunado a lo anterior, es claro el multicitado artículo 17 de la Ley 1112 de 2006, en señalar en el numeral segundo que la garantía de pensión mínima, se presenta cuando la sumatoria de las prestaciones, esto es, la que debe reconocer Colombia y la que corresponde al Reino de España, sea inferior al salario mínimo legal, evento en el cual, si debe ser ajustada la mesada pensional, no siendo este el caso de la actora, razón por la cual, no hay lugar a ordenar a Colpensiones reajustar la mesada pensional de la demandante.

No obstante, lo anterior, si se advierte que es Colpensiones, como entidad que reconoce la prestación, quien debe gestionar el pago del valor que le

corresponde al Reino de España, en el marco del convenio de cooperación suscrito entre los Estados.

Adicionalmente, en cuanto a las manifestaciones reiteradas por el procurador judicial de la señora Luzmila Bedoya Jaramillo, en la sustentación del recurso de alzada, referentes a que la Ley 1112 de 2016, no puede desconocer los principios constitucionales, ni afectar los derechos fundamentales de los afiliados, debe señalar la Sala que dicha manifestación si bien es teóricamente cierta, en el sublite, carece de respaldo probatorio caso, en tanto que, como ya se indicó la pensión reconocida a la demandante es superior al salario mínimo y en este sentido no se vulneran sus derechos a la seguridad social, ni al mínimo vital y adicionalmente, el convenio celebrado entre Colombia y el Reino de España, propende por garantizar una mayor cobertura del derecho a la seguridad social para los nacionales de cada país contratante y en virtud de dicho convenio, la demandante pudo adquirir el derecho a la prestación económica.

Aunado a lo anterior, la Ley 1112 de 2006, fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C 858 del 17 de octubre de 2007, oportunidad en la cual manifestó la Corte:

“Igualmente el Convenio se ajusta a lo que prevé el artículo 93 de la Carta, como quiera, que entre los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de seguridad social, se encuentran la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, incorporada al ordenamiento interno mediante la Ley 146 de 1994,^[48] el Protocolo de San Salvador aprobado mediante Ley 319 de 1996^[49] y el Código Iberoamericano de Seguridad Social incorporado mediante la ley 516 de 1999,^[50] para citar solo algunos ejemplos.

Por otro lado, la Corte encuentra que el Convenio desarrolla cabalmente el artículo 13 de la Constitución cuando el artículo 4 del Convenio le reconoce al trabajador nacional un tratamiento igualitario en materia de seguridad social en pensiones por parte del Estado receptor y promueve las condiciones para que la igualdad sea real. Las estipulaciones de este acuerdo también garantizan la dignidad del individuo y de su familia en materia laboral, al asegurar su protección frente a los riesgos de vejez, invalidez y muerte, por lo que constituyen un desarrollo compatible con la protección estatal al trabajo (Art. 25 CP).

El respeto a los derechos adquiridos que consagra el artículo 5 del Convenio resulta acorde con el artículo 58 constitucional, en la medida en que extiende el ámbito territorial de protección de estos derechos al territorio de la otra Parte y establece la posibilidad de sumar los tiempos cotizados en uno y otro Estado, con lo cual hace efectivo el derecho a la seguridad social que consagra el artículo 48 de la Carta.

Por su parte, el artículo 6 del Convenio al prever como regla general la aplicación de la ley de la Parte donde el trabajador ejerza su actividad laboral, se ciñe al principio de territorialidad en la aplicación de la ley, respetando de esta manera la soberanía nacional. Las excepciones a esta regla general, consagradas en el artículo 7 del Convenio, encuentran su justificación en la brevedad de la permanencia del trabajador en el territorio de la otra Parte, su migración constante o la naturaleza especial de sus funciones diplomáticas o consulares.

Los artículos 8, 9 y 10 del Convenio al regular que los periodos de cotización cumplidos bajo una de las legislaciones sean tomados en cuenta al momento de realizar la totalización de éstos periodos en uno y otro Estado, hacen efectiva la protección del derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Carta y de las garantías y principios del artículo 53 constitucional que protegen el derecho al trabajo. Dentro de tales principios se destaca el respeto del principio de favorabilidad, en la medida que el numeral 3 del artículo 9 del Convenio establece que para efecto del reconocimiento de las pensiones “la institución competente de cada Parte, reconocerá u abonará la prestación que sea más favorable al interesado.”

Por otro lado, el artículo 11 del Convenio, al reconocer validez a los documentos e informes médicos que se expidan en el territorio de una Parte para certificar la pérdida de capacidad laboral y asegurar el reconocimiento de la pensión de invalidez por las entidades competentes de la otra Parte, constituye un desarrollo armónico de los artículos 47 y 53 de la Carta.

Los artículos 12, 14, 16, 17, y 18 del Convenio que establecen varias presunciones para facilitar la aplicación de legislación de las Partes cuando se exijan ciertas condiciones para el reconocimiento de una prestación -estar sujeto a la legislación del Estado Parte que reconocerá la prestación, periodos de cotización en un tiempo determinado, acreditación de bases de cotización y totalización de periodos, etc.-, garantizan la efectividad del derecho a la seguridad social (artículo 48 CP), con plena sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, al permitir que tales condiciones se entiendan cumplidos si en el momento el trabajador está sujeto a la legislación de la otra Parte. En el mismo sentido, el artículo 20 del Convenio sienta normas específicas para la totalización de periodos de cotización simultáneos, que constituyen un desarrollo armónico con el principio de favorabilidad laboral consagrado en el artículo 53 de la Carta”.

De los intereses moratorios

Respecto de los intereses moratorios, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL 703 de 2013, con ponencia del doctor Jorge Mauricio Burgos Ruiz, flexibilizó el criterio según el cual, su aplicación era objetiva:

“La Sala como consecuencia de su nueva integración ha considerado pertinente moderar esta posición jurisprudencial, para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir”.

Y en la sentencia SL4174 del 02 de octubre de 2019, radicación 54375, precisó los eventos que por excepción excluyen la aplicación de los intereses moratorios, así:

“En lo que respecta al reconocimiento de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, si bien como ya se dijo, operan por el simple retardo de la administradora en la satisfacción de la prestación pensional, esta Sala también ha estimado que no en todos los casos es imperativo condenar a los intereses moratorios, y ha definido una serie de circunstancias excepcionales, en que se exonera de su pago, como por ejemplo: i) cuando se trata de prestaciones pensionales consolidadas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993; ii) cuando existe incertidumbre respecto de los beneficiarios o titulares del derecho pensional; iii) en las situaciones en que se trata de una nueva liquidación del monto y por cuanto de ello se eleva la cuantía de la mesada pensional; iv) cuando las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, tienen plena justificación porque encuentran respaldo normativo; v) cuando el reconocimiento deviene de un cambio de criterio jurisprudencial; vi) cuando se reconoce por inaplicación del principio de fidelidad; vii) cuando el pago de las mesadas pensionales no superó el término de gracia que la ley concede a la entidad que deba conceder la prestación pensional (CSJ SL5079-2018), situaciones que no ocurren en el caso de estudio.

En lo concerniente a los intereses moratorios, consideró el a quo, que no había lugar a imponer condena por este concepto, por cuanto Colpensiones negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la demandante a través de la resolución SUB 188928 del 6 de septiembre de 2017, bajo tres argumentos centrales, en primer lugar, señaló la entidad que con el fin de dar aplicación al convenio celebrado entre la Republica de Colombia y el Reino de España, el 16 de mayo de 2016, se solicitó a España a través del Ministerio de Trabajo como entidad de enlace, el formulario ES/CO-02, por medio del cual se certifica los tiempos laborados en dicho país, solicitud que fue reiterada el 8 de noviembre de 2016 y al no obtenerse respuesta se procedió al estudio de la pensión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1112 de 2006, teniendo en cuenta únicamente las semanas cotizadas en Colombia; en segundo lugar, que el causante no tenía la densidad de semanas para causar la prestación con base en la Ley 797 de 2003 y finalmente, que tampoco reunía las 26 semanas de aportes en el último año para aplicar Ley 100 de 1993, en su estado primigenio en virtud del principio de condición más beneficiosa.

En tercer lugar, el fallador de primera instancia, trajo a colación la antes citada sentencia SL 2022 de 2020, en la cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, también abordó el tema del trámite administrativo para la validación de los tiempos cotizados en los Estados contratantes a la luz de la Ley 1112 de 2006, para concluir que no es dable endilgarle a Colpensiones una mora en el reconocimiento de la prestación de sobrevivientes en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, toda vez que resultaba indispensable surtir de manera previa y ante las autoridades competentes de cada estado el proceso de certificación o ratificación de los tiempos cotizados en España.

Advirtiendo este Juez Plural que en principio resulta acertado el planteamiento realizado por el señor Juez Catorce Laboral del Circuito de Medellín, no obstante, se resalta que Colpensiones en la Resolución SUB 188928 de 2017, manifestó que una vez el Reino de España remita el formulario ES/CO-020

en atención a las solicitud elevada al Ministerio de Trabajo el 13 de octubre de 2016, la entidad procederá a realizar un nuevo estudio de la prestación para determinar si se tiene derecho totalizando los periodos de seguro en los dos Estados, en aplicación del Convenio suscrito entre la Republica de Colombia y el Reino de España.

A su vez, en la Resolución SUB 62063 del 3 de marzo de 2020, por medio de la cual se reconoció la prestación económica a la demandante, informó Colpensiones que el Ministerio de Trabajo en su labor de enlace mediante radicado N° 2019_11745816 de fecha 2 de septiembre de 2019, allegó los formatos ES/CO2, remitidos por el Reino de España, para el estudio de la pensión de sobrevivientes en aplicación al Convenio Colombia España, hito temporal a partir del cual es posible contabilizar el término de dos meses para decidir la procedencia de la prestación, previsto en la ley 701 de 2001 y por ende la indexación solo puede ser econocida hasta el 02 de noviembre de 2019.

Señaló el recurrente que a la accionante no se le puede imponer la carga de los cuatro años de espera para el reconocimiento de la prestación, no obstante, tampoco puede trasladarse a Colpensiones, en tanto que, se acreditó que Colpensiones actuando bajo el marco de sus competencias allegó al Ministerio de Trabajo los formularios CO/ES-01 y CO/ES-02, mediante oficio BZG 2016-711079 del 26 de mayo de 2016 y el 13 de octubre de 2016, el Ministerio procedió a remitir dicho formulario al Reino de España, el 11 de noviembre de 2016, Colpensiones reiteró la solicitud del formulario ES/CO02, y solo hasta el 17 de octubre de 2017, es decir, casi un año después el Ministerio de Trabajo reiteró la solicitud al INSS de Madrid España. Asimismo, con radicado N° 8SE2019230100000000952 del 16 de enero de 2019, la Cartera del Trabajo procedió a enviar al INSS de la dirección Provincial de Málaga España, las comunicaciones enviadas por Colpensiones y apenas el 30 de agosto de 2019, el Ministerio de Trabajo, remitió el formulario ES/CO-02, allegado por el

gobierno español a Colpensiones. Lo anterior, según la respuesta allegada por el Ministerio del Trabajo al oficio decretado por el Juzgado de conocimiento, evidenciándose que la tardanza en la resolución de fondo de la petición de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes efectuada por la demandante, obedeció a circunstancias ajenas a Colpensiones e imputables al Ministerio del Trabajo y a las autoridades competentes españolas.

Bajo el anterior horizonte, estima la Sala procedente el reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 3 de noviembre de 2019, es decir, dos (2) meses después de que Colpensiones recibió el formato ES/CO2, intereses que se reconocerán hasta el 1° de abril del año 2020, teniendo en cuenta que la prestación le fue reconocida con inclusión en nómina de marzo de 2020, que se paga en abril de 2020. Efectuada la liquidación, se obtiene como valor a reconocer la suma de \$3.617.300.

En igual sentido encuentra la Sala que procede la indexación de las mesadas causadas entre el 28 de diciembre de 2015 fecha de la causación del derecho y el 2 noviembre de 2013, esto es, hasta el día anterior a la fecha a partir de la cual se reconocen los intereses moratorios, en tanto que la misma constituye un factor que compensa la pérdida del valor real de los dineros que en su oportunidad debieron pagarse y que en ese lapso no tienen ningún factor de actualización, indexación que liquidada desde la fecha de causación de cada mesada pensional hasta el 02 de noviembre del año 2019, asciende a la suma de \$ 2.293.321.

Así las cosas, se modificará el numeral. segundo de la sentencia recurrida para señalar que la indexación se causa por el periodo 28 de diciembre de 2015 al 02 de noviembre de 2019, ascendiendo a la suma de \$2.293.32 y se revocaran los numerales tercero y cuarto de la sentencia objeto de apelación, para en su

lugar ordenar a Colpensiones reconocer y pagar a la demandante la suma de \$3.617.300, por concepto de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados entre el 03 de noviembre de 2019 y el 30 de marzo de 2020.

Sin Costas en esta instancia.

3. DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA

1.- Se **MODIFICA** el numeral segundo de la Sentencia de Primera Instancia proferida el 28 de enero de 2021 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora LUZMILA BEDOYA JARAMILLO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, en el sentido de establecer que la indexación se causa por el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 2015 y el 02 de noviembre de 2019, la cual asciende a la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS (\$2.293.321)

2. SE **REVOCAN** los numerales tercero y cuarto, para en su lugar, CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar a la demandante la suma de TRES MILLONES SIESCIENTOS DIECISIETE MIL

TRESCIENTOS PESOS (\$3.617.300), por concepto de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, liquidados desde el 3 de noviembre de 2019 al 30 de marzo de 2020, fecha de inclusión en nómina.

3. Se **CONFIRMA** la sentencia en lo demás.

4. Sin **COSTAS** en esta instancia.

5.- Se ordena la devolución del expediente digital con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior se notifica a las partes por ESTADOS, de conformidad con el artículo 295 del Código General del Proceso.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE


CARLOS JORGE RUIZ BOTERO


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

La presente providencia fue notificada por estado No. **66** fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 21 de abril de 2021.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario

ANEXO 1. Liquidación indexación

AÑO	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
ENERO		\$ 49.064,48	\$ 68.028,57	\$ 43.344,90	\$ 21.210,29	
FEBRERO		\$ 93.450,84	\$ 60.669,75	\$ 38.098,99	\$ 16.928,35	
MARZO		\$ 86.622,62	\$ 57.198,21	\$ 36.366,69	\$ 13.712,58	
ABRIL		\$ 83.058,96	\$ 53.759,24	\$ 32.926,27	\$ 10.091,94	
MAYO		\$ 79.374,10	\$ 52.165,41	\$ 31.069,86	\$ 7.793,28	
JUNIO		\$ 75.958,36	\$ 51.333,32	\$ 29.960,51	\$ 5.864,93	
JULIO		\$ 72.268,96	\$ 51.711,31	\$ 30.921,75	\$ 4.230,23	
AGOSTO		\$ 74.493,41	\$ 50.653,94	\$ 30.034,36	\$ 3.592,56	
SEPTIEMBRE		\$ 74.878,34	\$ 50.352,40	\$ 28.780,88	\$ 1.967,99	
OCTUBRE		\$ 75.340,81	\$ 50.277,05	\$ 27.898,64	\$ 771,87	
NOVIEMBRE		\$ 74.493,41	\$ 48.923,48	\$ 27.091,80	\$ 0,00	
DICIEMBRE	\$ 192.587,97	\$ 84.623,20	\$ 92.313,89	\$ 49.800,65		
TOTAL	\$ 192.587,97	\$ 923.627,49	\$ 687.386,56	\$ 406.295,30	\$ 83.424,16	\$ 2.293.321,48

ANEXO 2. LIQUIDACIÓN INTERESES MORATORIOS

Período					Liquidación sobre mesadas diferentes al salario mínimo	
Desde	Hasta	Fecha de mora	Diferencia en días	# Mesadas	Valor pensión	Intereses
3-nov-19	3-nov-19	4-nov-19	149	1	\$ 33.606.433	\$ 3.425.525
4-nov-19	30-nov-19	1-dic-19	122	1	\$ 653.191	\$ 54.515
1-dic-19	31-dic-19	1-ene-20	91	2	\$ 1.451.534	\$ 90.362
1-ene-20	31-ene-20	1-feb-20	60	1	\$ 753.346	\$ 30.922
1-feb-20	29-feb-20	1-mar-20	31	1	\$ 753.346	\$ 15.976
1-mar-20	31-mar-20	1-abr-20	0	1	\$ 753.346	\$ -
					\$ 37.971.196	\$ 3.617.300
					Retroactivo	Intereses